



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCION S.A. Y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 013 2022 00371 01
Sentencia: S-313

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por la **AFP PORVENIR S.A.**, al igual que el grado jurisdiccional de **Consulta** concedido a favor de **COLPENSIONES** en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 28 de junio de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

CESAR AUGUSRO AGUDELO SALAZAR demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia, inexistencia o

nulidad de la afiliación a PROTECCIÓN S.A., debiéndose entender que siempre estuvo vinculado al RPM administrado por COLPENSIONES, entidad que debe reconocer en su momento la prestación de vejez.

Como consecuencia, se ordene a PROTECCIÓN S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes, con sus intereses, bonos pensionales, frutos civiles, rendimientos, sin deducción de ningún tipo. Además, pretende se condene en costas a las demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 08 de abril de 1965; que cotizó al ISS hoy COLPENSIONES desde el inicio de su vida laboral en enero 1987 hasta octubre de 1994; que bajo error por falta de información se traslada a HORIZONTE S.A. en noviembre de 1994; que nunca se le explicó de forma detallada las consecuencias del traslado, ni cómo funcionaba el régimen o como se accedía a la pensión de vejez; que según historia laboral expedida por PROTECCIÓN cuenta con 1.383,85 semanas; que ésta entidad le expidió calculo pensional, en donde se observa claramente el detrimento al continuar con la AFP, como el engaño al ofrecer mejores posibilidades pensionales y que presentó solicitud de traslado de régimen ante Colpensiones el 19 mayo de 2022, a la cual no se le dio una respuesta de fondo.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, las cotizaciones al ISS y la solicitud de traslado de régimen ante Colpensiones. Frente a los demás hechos manifiesta que no le constan por ser situaciones de carácter particular del demandante de los cuales Colpensiones no tiene conocimiento. Se opuso a todas las pretensiones. Como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inexistencia de la obligación

para decretar el traslado, improcedencia de los intereses moratorios, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración, seguros previsionales y comisiones indexados, prescripción, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. indicó que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, que no le consta su afiliación y cotizaciones al ISS - hoy Colpensiones; que el actor se trasladó del ISS a Horizonte - hoy Porvenir y posteriormente se trasladó a DAVIVIR S.A., que luego se trasladó a PROTECCIÓN en 2006. No es cierto que la afiliación se haya dado sin que mediara información adecuada y real sobre las implicaciones de la elección de régimen; por otro lado, antes de cumplir 52 años, sí se le brindó doble asesoría pensional, sin incumplir la obligación de actuar de forma diligente y prudente; que es cierto el número de semanas con las que cuenta, sin embargo, actualizada la información el actor cuenta con 1.452,42 semanas; y que no le consta su solitud ante Colpensiones. Niega que en 2027 cumpla con los requisitos para pensión, toda vez que se encuentra afiliado al RAIS y se deben analizar los requisitos bajo este régimen. Se opuso a las pretensiones toda vez que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos, excepción genérica, entre otras.

PORVENIR S.A. dio contestación a la demanda expresando que no le consta la fecha de nacimiento del demandante; que no es cierto que esta entidad no le haya brindado información precisa y suficiente de las características, funcionamiento, requisitos del RAIS; y que no le constan los demás hechos por ser ajeno a esta entidad. Se opuso a las pretensiones. Y como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y restituciones mutuas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 28 de junio de 2023, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS administrado por PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.; **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo para el efecto cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración, vigentes a partir del 1º de agosto de 1998 exclusivamente por la afiliación del actor, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, debidamente indexados; **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a que traslade las cuotas y/o gastos de administración cobrados por la afiliación del actor entre el 1º de octubre de 1994 al 31 de julio de 1998, debidamente indexadas; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a recibir tales sumas de dinero y a activar la afiliación del demandante al RPM; y **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia la apoderada de PORVENIR S.A., presentó recurso de apelación parcial, manifestando inconformidad con la indexación, pues, teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones que deben cumplir las AFP está la de garantizar la rentabilidad mínima de las cuentas de ahorro individual de cada uno de sus afiliados, resulta incompatible y excluyente ordenar la indexación, pues los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante no se han visto afectados por la inflación, por el contrario se le ha generado rendimientos que no se hubiesen producido en el RPM, y que como se señaló en la sentencia de primera instancia los efectos de la ineficacia son volver las cosas al estado anterior y hacer como si el traslado de régimen nunca hubiese existido, pues entonces no debería haberse condenado a la devolución de los rendimientos financieros

atendiendo a que en el RPM no se generan ningún tipo de rendimientos financieros, entendiéndose como una doble sanción al ordenar la devolución de los rendimientos financieros y además la indexación de las condenas, debiéndose tener en cuenta que la gestión que adelantó esta AFP supera con creces la posible pérdida del poder adquisitivo de los dineros de los afiliados representados en los aportes pensionales.

Se conoce del asunto, asimismo, vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, COLPENSIONES se ratifica en lo expuesto en primera instancia, en lo que respecta a que no tuvo incidencia alguna en el traslado ya que no participó del mismo, y que debe tenerse en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema. En caso de confirmarse la condena no se ordena la indexación.

PORVENIR S.A. solicita revocar íntegramente la sentencia, toda vez que no se alegó y menos probó, los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez; que se le garantizó el derecho de retracto y la libre escogencia; que si se acreditó el deber de información; que no se pueden imponer cargas probatorias distintas a las previstas en la ley; que debe ser analizada en conjunto todas las pruebas; que conforme a la línea jurisprudencial de la Corte, no existe norma que prevea tal situación; que se debe mirar la buena o mala fe de las partes en las restituciones mutuas; y que no se debe imponer la indexación en las condenas.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e

igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** el Sr. CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR nació el 08 de abril de 1965; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones desde el 23 de enero de 1987¹, acumulando en esa entidad un total de 175,43 semanas; **iii)** que el 27 de septiembre de 1994² suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR S.A.; **iv)** que el 25 de junio de 1998 realizó traslado hacia DAVIVIR S.A. hoy PROTECCIÓN S.A.³, **vi)** y que el 19 de julio de 2006 se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A.⁴ entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación

¹ Folios 25 a 29 de la contestación de Colpensiones.

² Folio 26 de la Contestación de Porvenir S.A.

³ Folio 30 de la contestación de Protección S.A.

⁴ Folio 31 de Contestación de Protección S.A. (SIAFP)

particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁵, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008,

⁵ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N.º 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;

- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que los fondos privados hayan brindado, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, los Fondos privados incumplieron con su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, para el año de 1994 se trasladó a HORIZONTE S.A. ya que le manifestaron que Colpensiones no era viable y que iba a desaparecer, siendo lo mejor pasarse a un fondo privado para no quedar desamparado, y que en el fondo privado obtendrían una rentabilidad

positiva y podrían pensionarse antes de tiempo; que solo se le habló de las ventajas del RAIS pero no las ventajas de estar afiliado a COLPENSIONES. Posteriormente en 1998 se trasladó a DAVIVIR, sin recordar el motivo del traslado, pero que posiblemente fue cuando laboraba en Seguros Atlas. Finalmente, indica que en el año 2006 se afilió a PROTECCIÓN ya que tenía la idea que esta administradora era más segura, que el asesor le manifestó las mismas ventajas de estar en un fondo privado; y que cuando le explicaron de la prohibición legal, decide realizar el trámite, pero talento humano de la empresa donde laboraba, nunca le dio respuesta de dicho trámite.

De lo anterior no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

En consecuencia, en este aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de la *a quo* de ordenar el traslado de las sumas de las cuotas y/o gastos de administración, pero sin incluir lo relacionado con las la sumas destinadas a fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada

persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Ahora, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la

declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **MODIFICADA** en el sentido de ordenarle a la AFP PORVENIR S.A. que proceda con el traslado de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que el SEÑOR CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR estuvo vinculado a esa entidad, incluyendo, como debe ser, sumas adicionales de las aseguradoras y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Esta Sala igualmente advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva **indexación** tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene el apoderado de PROTECCIÓN S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así las cosas, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA, MODIFICADA y ADICIONADA.**

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 28 de junio de 2023, pero *i)* se **MODIFICA** en el sentido de ordenarle a PORVENIR S.A. que traslade a COLPENSIONES, además de lo ya ordenado por la juez, lo concerniente a las sumas destinadas al fondo de garantía de pensión mínima y los seguros previsionales debidamente indexados. *ii)* se **ADICIONA** en el sentido de **ORDENAR** a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. que al momento de cumplirse la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación del demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e0d3f6d31cccc4b5c6efffba50bdc731e9748cb19aaca50022b140da7f4fed9f**

Documento generado en 10/11/2023 03:32:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>